

Abril 2025

Global Tax Trends

Noticias relevantes de
tributación internacional

Impuestos Internacionales

© 2025 Grant Thornton Chile



Estados Unidos impone nuevos “aranceles recíprocos”

El miércoles 2 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció un extenso paquete de aranceles que afectará a decenas de países y que, sin lugar a dudas, repercutirán en el comercio internacional.

Según lo señalado por la Casa Blanca, la medida busca fortalecer la industria estadounidense y reducir el déficit comercial. Bajo el concepto de “aranceles recíprocos”, se establece una tasa universal base del 10%, que afectará alrededor de 60 países, entre ellos, los productos de la Unión Europea y de Chile. No obstante, el trato no ha sido uniforme entre las jurisdicciones: los productos provenientes de China deberán enfrentar un arancel del 145%, cifra considerablemente mayor al 34% originalmente anunciado.

La respuesta de China no se hizo esperar. El viernes 5 de abril, Beijing anunció la imposición de aranceles equivalentes al 34% sobre productos estadounidenses y presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), acusando a EE.UU. de infringir las normas del comercio multilateral. La tensión escaló aún más cuando, el lunes siguiente, el presidente Trump amenazó con incrementar los aranceles hasta un 50%, elevándolos finalmente al 145% para ciertos productos chinos. China, por su parte, elevó sus aranceles hasta un 125% para las importaciones estadounidenses.

El 9 de abril, en tanto, el presidente Trump anunció que congelaría el 90% de los “aranceles recíprocos” por un plazo de 90 días, medida que no beneficiaría a China, a la cual mantuvo el arancel.



El lunes 21 de abril, el gobierno chino advirtió a otros países que no redujeran el comercio con China para obtener prórroga de los nuevos aranceles de los EE.UU., prometiendo tomar represalias en contra de las jurisdicciones que adoptaran medidas de ese tipo. Esto —indicó el ministro de comercio de China— en respuesta a reportes que indican que el presidente Donald Trump estaba intentando presionar a otros países para reducir sus nexos comerciales con China.

El conflicto comercial entre ambos países ya está teniendo efectos visibles en los mercados financieros globales, que acumulan varias jornadas consecutivas de caídas. En este contexto, crece el temor a una recesión mundial, impulsado por el alza en los costos de producción, interrupciones en las cadenas de suministro y una marcada disminución en la confianza empresarial.

Latinoamérica ha experimentado un impacto más moderado frente a esta nueva ola arancelaria: la mayoría de sus exportaciones estarán gravadas con el arancel base del 10%. En el caso particular de Chile, sectores

estratégicos como la agricultura y la pesca —especialmente productos como el salmón, la uva y el vino— resultan afectados. Sin embargo, la exclusión del cobre y la madera de las nuevas tarifas representa un alivio parcial para la economía nacional.

En este escenario, surge una interrogante clave: ¿en qué situación se encuentra el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y EE.UU.? Desde 2004, dicho acuerdo permite el ingreso de productos chilenos al mercado estadounidense sin aranceles. No obstante, las nuevas medidas anunciadas por la administración Trump —amparadas en la cláusula de “seguridad nacional” del mismo tratado— también se aplicarían a Chile.

Así, el volátil panorama actual no solo pone a prueba los marcos comerciales internacionales, también la resiliencia de la economía chilena y su capacidad de adaptación frente a un escenario global en transformación.

El Reino Unido aprueba la Ley de Finanzas de 2025

El 21 de marzo de 2025, la Ley de Finanzas de 2025 del Reino Unido recibió la aprobación del rey, materializándose de esta forma la incorporación de cambios en la legislación del Pilar Dos del sistema tributario británico. La tramitación de esta ley data del pasado 30 de octubre de 2024, en el marco de la propuesta de presupuesto de dicho país.

Dentro de las reglas de Pilar Dos incorporadas a través de Ley de Finanzas destaca la “Regla de Rentas Insuficientemente Gravadas” (“Undertaxed Profits Rules” o “UTPR”), que aplica a los períodos tributarios que comenzaron el 31 de diciembre de 2024 e impone un impuesto complementario aplicable directamente a las “constituent entities” del Reino Unido; es decir, aquellas que pertenecen a un grupo empresarial al que se le deben aplicar las reglas del citado pilar.

Este impuesto tiene un importe equivalente al UTPR que se haya asignado a una entidad del Reino Unido. Sin embargo, el contribuyente puede identificar una entidad dentro del grupo que deba responsabilizarse del UTPR.

La Ley de Finanzas también modificó las disposiciones de los “Puertos Seguros” (Safe Harbours) del UTPR. Cabe recordar que los puertos seguros son una medida temporal diseñada para eximir a las operaciones de un grupo en jurisdicciones de bajo riesgo del requisito completo de reporte para cumplir con el Pilar Dos. La ley establece un puerto seguro transitorio de UTPR, referido al puerto seguro del Reporte País por País (“Country by Country” o “CbyC”), que ahora incluye reglas contra el arbitraje híbrido según la Guía Administrativa de la OCDE de diciembre de



2023 (para transacciones realizadas a partir del 16 de diciembre de 2022) y se aplicará a los gastos tributarios rechazados atribuibles a beneficios obtenidos desde el 14 de marzo de 2024.

La mayoría de las disposiciones introducidas por la Ley de Finanzas se aplicarán de manera retroactiva a los ejercicios fiscales que comenzaron el 31 de diciembre de 2023. Otras, en cambio, tendrán vigencia para años fiscales a contar del 31 de diciembre de 2024.

Consejo de la Unión Europea aprueba el paquete “ViDA” sobre IVA

Con el objeto de modernizar el sistema del Impuesto a las Ventas y Servicios en la Unión Europea (UE), el pasado 11 de marzo de 2025 sus países miembros aprobaron el acuerdo denominado “VAT in the Digital Age” (IVA en la Era Digital), o ViDA, por sus siglas en inglés.

Se prevé que los cambios de ViDA tendrán amplias repercusiones y afectarán a la mayoría de las empresas que operan en la UE, por cuanto busca modernizar y mejorar el sistema de IVA ya vigente para alinearlos de mejor manera a la economía digital y prevenir el fraude fiscal, en particular, respecto de la recaudación de impuestos. Las medidas adoptadas abarcan tres aspectos del IVA en relación con la era digital:

Facturación electrónica y requerimientos de reporte digital (DRR, por sus siglas en inglés). Para el 1 de Julio de 2030, la emisión de facturas electrónicas será la regla general en la UE y obligatoria para cualquier transacción contenida en el DRR, el que, cabe señalar, es un sistema de reporte digital que reemplazará el modelo actual (European Community Sales Listing), definiendo que la facturación electrónica es obligatoria en las transacciones que indica. La UE proveerá un formato de emisión de facturas y estas deberán ser emitidas dentro de los 10 días seguidos a la venta del bien o la prestación del servicio, o bien, desde la percepción del precio en caso de que esto ocurra primero.

Economía de plataforma. A contar del 1 Julio de 2028 se establece una nueva regla sobre el lugar de prestación de servicios de facilitación entre empresas y consumidores (business to consumer, o B2C). El lugar de prestación de

servicios será la interfaz o plataforma electrónica donde se realiza la transacción subyacente. También hay una segunda norma para el alquiler a corto plazo de servicios de alojamiento y transporte de pasajeros, aplicable desde el 1 de enero de 2030. Esta refiere a una ficción donde el proveedor de plataformas digitales en este caso resulta obligado a la declaración y pago del impuesto por la operación subyacente.

Registro único de IVA. Si bien desde el año 2021 existe el sistema de ventanilla única (OSS e ISS), que permite a las empresas que operan en distintos países de la UE declarar y pagar el IVA en solo uno de ellos, este mecanismo no está disponible para todas las actividades. Con el cambio, se determina que el régimen OSS se expandirá a otras actividades a contar del 1 de junio de 2028.

ViDA, por otro lado, tiene similitudes con la legislación chilena en materia de cumplimiento e IVA:

Respecto del proveedor presunto. La Ley 21.713, incorporó un nuevo artículo 3 bis en la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS). Esta norma agrega como contribuyente de IVA al operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera vendedor habitual del bien o prestador del servicio, siempre que la operación subyacente que se concluya a través de la plataforma esté gravada con IVA. Esta norma comenzará a regir en octubre de 2025 en Chile y es similar a la establecida por el sistema ViDA.

Respecto de la facturación electrónica. La emisión de documentos tributarios electrónicos es obligatoria hace ya varios años en Chile, salvo algunas excepciones en casos muy particulares y poco usuales.

Inversión del sujeto pasivo y registro simplificado. Al igual que el caso anterior, nuestra legislación ya cuenta con una regla de cambio de sujeto para operaciones B2B entre una entidad sin domicilio ni residencia y una local. Luego, para operaciones B2C, la Ley

21.210 creó un régimen simplificado de declaración y pago de IVA para proveedores no residentes ni domiciliados en Chile.

Podemos concluir que, a todas luces, ViDA contempla cambios positivos en la adaptación de la legislación a la economía digital. Asimismo, es posible observar que nuestra legislación ha estado en la vanguardia en materia de tributación de IVA y plataformas digitales.

Perú ratifica el Convenio Multilateral de la OCDE para prevenir la BEPS

El pasado 13 de marzo, el Congreso de Perú ratificó la adherencia de ese país al Convenio Multilateral de la OCDE, que implementa medidas para prevenir la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Luego, el 3 de abril de 2025, hizo la correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Resolución Legislativa No. 32285 que ratifica el convenio. El único trámite pendiente es que el gobierno peruano deposite la ratificación ante la OCDE.

Con esta ratificación, Perú da un paso decisivo hacia la modernización de su red de Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), alineándose con los estándares internacionales en materia de fiscalidad internacional.

El convenio es un instrumento multilateral que tiene como objetivo implementar de manera rápida, coordinada y consistente las medidas derivadas del Plan de Acción contra la BEPS. Su propósito es actualizar simultáneamente múltiples convenios tributarios suscritos por los países adherentes, sin necesidad de renegociar

cada tratado.

Por ende, esta convención permitirá modificar y actualizar simultáneamente los CDI actualmente suscritos por Perú, entre los cuales se encuentra Chile.

Se destaca que esta ratificación se hizo con reserva; por ejemplo, se excluyeron los artículos sobre “entidades transparentes” y “división de contratos”, entre otros.

Tribunal italiano reconoce procedencia de tasa reducida de impuesto aplicable a dividendos de compañía estadounidense

En septiembre de 2024 el tribunal de primera instancia de Pescara, Italia, emitió una sentencia (causa no. 509/2024) reconociendo que la tasa aplicable de impuesto a los dividendos recibidos por una entidad estadounidense de una compañía italiana era del 1,2% y no del 5%, como establece el CDT suscrito entre ambos países.

El tribunal declaró que, en virtud del principio de libre circulación de capitales consagrado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una sociedad estadounidense que en 2018 fue sujeta a una retención en la fuente del 5% sobre dividendos —por aplicación del CDT de Estados Unidos e Italia— debía ser tratada como beneficiaria residente en la UE o en Italia. En consecuencia, la retención aplicable no debía superar el 1,2%.

La sentencia establece que toda retención en origen que supere dicho porcentaje resulta contraria al principio de libre circulación de capitales y, por tanto, debe ser reembolsado el pago hecho en exceso.

Hacemos presente que el principio de libre circulación de capitales constituye uno de los fundamentos del derecho comunitario y prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y pagos tanto entre estados miembros de la UE como entre estos y terceros países.

Este pronunciamiento marca un precedente importante, al extender la aplicación de dicho principio a sociedades no pertenecientes a la



UE, siempre que se trate de países que mantengan un adecuado intercambio de información fiscal con Italia.

Esta decisión podría beneficiar a todas las sociedades estadounidenses —y otras entidades en condiciones similares— que hayan sido gravadas con tasas que superen el 1,2%.

United States Imposes New “Reciprocal Tariffs”

On Wednesday, April 2nd, 2025, U.S. President Donald Trump announced a sweeping package of tariffs set to affect many countries that will undoubtedly have an impact on international trade.

According to the White House, the measure aims to strengthen the domestic industry and reduce the US trade deficit. Under the framework of “reciprocal tariffs,” a universal base rate of 10% has been established. However, the policy does not apply equally to all countries: while Chinese products will be subject to a 145% tariff — substantially higher than the initially announced 34% — goods from the European Union and Chile will face the standard 10% rate.

China’s response was swift. On Friday, April 5th, Beijing announced retaliatory tariffs of 34% on US goods and filed a complaint before the World Trade Organization (WTO), accusing the US of violating multilateral trade rules. Tensions escalated further when, the following Monday, President Trump threatened to raise tariffs by an additional 50%, ultimately bringing the total rate on certain Chinese products to 145%. China, for its part, raised its tariffs to 125% for the United States.

President Trump, on April 9th, announced that he would freeze 90% of “reciprocal tariffs” for 90 days, a move that would not benefit China, to which he maintained the aforementioned tariff.



On Monday, April 21st, the Chinese government warned other countries not to reduce trade with China in order to obtain an extension of the new US tariffs, promising to retaliate against jurisdictions taking such measures. This, China's commerce minister indicated, in response to reports that President Donald Trump was trying to pressure other countries to reduce their trade ties with China.

The US-China trade dispute is already having visible effects on global financial markets, which have accumulated several consecutive days of decline. Fears of global recession are growing, driven by rising production costs, disruptions in supply chains and a sharp decline in business confidence.

Latin America has so far experienced a more moderate impact from this wave of tariffs: most of its exports will be subject with a 10% base tariff. In the particular case of Chile, key sectors such as agriculture and fisheries—

particularly products like salmon, grapes, and wine—have been affected. Nevertheless, the exclusion of copper and timber from the new tariffs provides partial relief for the Chilean economy.

Against this backdrop, a critical question arises: what is the status of the Free Trade Agreement (FTA) between Chile and the United States? Since 2004, this agreement has allowed Chilean products to enter the U.S. market tariff-free. However, the new measures introduced by the Trump administration—justified under the FTA's "national security" clause— would also apply to Chile.

Thus, the current scenario not only tests international trade frameworks, but also the resilience of the Chilean economy and its capacity to adapt to a changing global scenario.

The UK approves the Finance Act 2025

On March 21st, 2025, the Finance Act 2025 received Royal Assent, thus materializing the incorporation of changes to the UK's Pillar Two legislation. The processing of this law dates back to October 30th, 2024, as part of the UK budget proposal.

Among the Pillar Two rules incorporated through the Finance Act is the “Undertaxed Profits Rule” (“UTPR”), which applies to tax periods beginning from December 31st, 2024.

This rule imposes a supplementary tax directly applicable to UK constituent entities, which are those belonging to a corporate group to which the Pillar Two rules must be applied. This tax is equal in amount to the UTPR that has been allocated to a UK entity. However, the taxpayer may identify an entity within the group that should be liable for the UTPR.

The Finance Act also amended the “Safe Harbours” provisions of the UTPR. It is important to note that safe harbors are a temporary measure designed to exempt a group's operations in low-risk jurisdictions from the full Pillar Two reporting requirement.

The Act establishes a transitional UTPR safe harbor. This refers to the Country by Country Reporting (“Country by Country” or “CbyC”) safe harbor and now includes rules against hybrid arbitrage under the December 2023 OECD Administrative Guidance (for transactions occurring on or after December 16th, 2022) and will apply to disallowed tax expenditures attributable to profits earned on or after March 14th, 2024.



Most of the provisions introduced by the Finance Act will apply retroactively for tax years from December 31st, 2023, others for tax years beginning on or after December 31st, 2024.

Council of the UE approves the “ViDA” Package on VAT

In order to modernize the Sales and Service Tax system in the European Union (“EU”), on March 11th, 2025, the member countries of the European Union approved the “VAT in the Digital Age” or the ViDA agreement. ViDA changes are expected to impact on the VAT landscape and are likely to affect most businesses operating in the EU, as it seeks to modernize and improve the VAT system in the EU to align it better with the digital economy and prevent tax fraud. In particular, with respect to tax collection.

The measures adopted cover three aspects of VAT in relation to the digital age:

Electronic invoicing and digital reporting requirements (DRR). By July 1st, 2030, the issuance of electronic invoices will be the general rule and will be mandatory for any transaction contained in the Digital Reporting Requirements, or DRR. Regarding the “DRR”, this is a digital reporting system that will replace the current model (European Community Sales Listing) and that states that electronic invoicing is mandatory in the transactions it indicates. The EU will provide a format for issuing invoices and these must be issued within 10 days from the sale of the good or the rendering of the service, or from the receipt of the price, whichever occurs first.

Platform economy. As of July 1st, 2028, a new rule on the place of supply of facilitation services between businesses and consumers (B2C) will be in force. The place of provision of services, whether an electronic interface or platform, is the place where the underlying transaction takes place. There is also a second

rule for the short-term rental of accommodation and passenger transportation services, applicable from January 1st, 2030. This refers to a platform fiction for which the provider of digital platforms is obliged to the declaration and payment of the tax for the underlying transaction.

Single VAT registration. Although since 2021 there is a single window system (OSS and ISS), which allows companies that carry out activities subject to VAT in different EU countries to declare and pay VAT in only one of the countries in which they carry out their activities, this system is not available for all activities. It is determined that the OSS regime will be expanded to other activities as of June 1st, 2028.

ViDA has some similarities with the Chilean legislation in terms of compliance and VAT:

Regarding the presumptive supplier. Law No. 21.713 incorporated a new article 3 bis in the Chilean VAT Law (“LIVS”). This rule deems as VAT taxpayer, the operator of a digital intermediation platform, as if it were a regular seller of the good or service provider, provided that the underlying transaction concluded through the platform is taxed with VAT. This rule will come into force in October 2025 in Chile and is similar to the one established in ViDA.

Regarding electronic invoicing. The issuance of electronic tax documents in Chile has been mandatory for several years in Chile, except for some exceptions in very particular and unusual cases.

Reversal of the taxpayer and simplified registration. As in the previous case, our legislation already has a rule of subject change for B2B transactions between a non-domiciled and non-resident entity and a local entity. Then, for B2C operations, Law No. 21.210 created a simplified VAT declaration and payment regime for non-residents and non-domiciled entities.

We can conclude that ViDA clearly contemplates positive changes in the adaptation of legislation to the digital economy. Likewise, we can observe that our legislation has been at the forefront in terms of VAT taxation and digital platforms.

Peru ratifies the OECD Multilateral Convention to prevent BEPS

On March 13th, the Peruvian Congress ratified Peru's adherence to the OECD Multilateral Convention that implements measures to prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Then, on April 3rd, 2025, it made the corresponding publication in the Official Gazette of Legislative Resolution No. 32285 ratifying the Convention. The only pending procedure is for the Peruvian government to deposit the ratification before the OECD.

Therefore, this convention will allow to simultaneously modify and update the DTTs currently subscribed by Peru, including Chile.

It should be noted that this ratification was made with reservations, for example, the articles on “transparent entities” and “division of contracts”, among others, were excluded.

With this ratification, Peru takes a decisive step towards the modernization of its network of Double Taxation Avoidance Treaties (DTT), aligning itself with international standards in international taxation.

The Convention is a multilateral instrument that aims to implement the measures derived from the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan in an expeditious, coordinated and consistent manner. Its purpose is to simultaneously update multiple tax treaties signed by the adhering countries, without the need to renegotiate each treaty.

Italian Court Recognizes Application Principle of Free Movement of Capital to U.S. Company in Dividend Withholding Case

The court of first instance of Pescara, Italy, issued a judgment in September 2024 (case no. 509/2024) in which it recognized that the applicable withholding tax rate on dividends received by a U.S. entity from an Italian company was 1.2% and not 5%, as set forth in the DTT entered between those countries.

The court stated that, under the principle of free movement of capital enshrined in Article 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), a US company that in 2018 was subject to a 5% withholding tax on dividends - by application of the US-Italian DTT - should be treated as a beneficiary resident in the EU or in Italy. Accordingly, the applicable withholding tax can't exceed 1.2%.

The ruling establishes that any withholding tax paid in excess of this percentage is contrary to the principle of free movement of capital and, therefore, the excess payment must be refunded.

We note that the principle of free movement of capital is one of the foundations of Community Law and prohibits restrictions on the movement of capital and payments both between EU member states and between these and third countries.

This ruling sets an important precedent by extending the application of this principle to non-EU companies, provided that they are countries that maintain an adequate exchange of tax information with Italy.

This decision could benefit all US companies - and others in similar conditions - that have been taxed at rates that exceed 1.2%.



Contáctanos



Francisca Pérez

Tax Lead Partner

francisca.perez@cl.gt.com



Oliver San Juan

International Tax Partner

oliver.sanjuan@cl.gt.com



Daniela Guerrero

Tax Director

daniela.guerrero@cl.gt.com



Rogelio Soto

Tax Manager

rogelio.soto@cl.gt.com



Javiera Sepúlveda

International Tax Manager

javiera.sepulveda@cl.gt.com



Pía Marín

International Tax Manager

pia.marin@cl.gt.com

Av. Presidente Riesco 5335, Oficinas
603/402. Las Condes.
Santiago, Chile.

contacto@cl.gt.com
+56 2 33758742

www.grantthornton.cl